

# 1. INTRODUCCIÓN

*Este número de la revista América Latina Hoy está dedicado a analizar el conflicto social y la violencia política en Colombia. Para ello, desde el Seminario de Estudios Políticos sobre América Latina y el Instituto de Estudios de Iberoamérica y Portugal de la Universidad de Salamanca, se intenta plantear una reflexión plural, serena y desapasionada; tarea nada sencilla dada la amplitud e intensidad de los conflictos que vive este país, lo extremo como se expresan y la profundidad de sus secuelas.*

*En esta monografía se analiza el conflicto, sus causas, desarrollos y posibles salidas a partir de temas tan claves y fundamentales como situación agraria, narcotráfico, seguridad nacional, desarrollo, justicia... En definitiva, sobre un conjunto de cuestiones que afectan directamente a derechos humanos: civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.*

*Colombia, andina, caribeña y amazónica con una de las mayores concentraciones del mundo en biodiversidad por km<sup>2</sup>, grandes recursos naturales, mineros y energéticos, con una gran riqueza multicultural y humana, constituida en un 50% por personas menores de 25 años, llena de creatividad, sueños y esperanzas, dinámica y vital, se encuentra sumida en una profunda crisis.*

*Este país, uno de los más violentos del mundo, atraviesa momentos muy difíciles, con violaciones graves, masivas y sistemáticas de los derechos humanos: masacres, asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, desplazamientos masivos de población, exilio... Un conflicto armado crónico que se agudiza y manifiesta preocupantes síntomas de degradación. Una severa situación económica agravada en coyunturas recientes y una intolerable distribución de la riqueza, incapaz de garantizar condiciones dignas para la mayoría de los colombianos; así más del 50% de sus cerca 40 millones de habitantes se encuentra por debajo de la línea de la pobreza y sufre graves problemas sanitarios e incluso alimentarios.*

*Frente a esta realidad, los medios de información nacionales e internacionales creadores de opinión, presentan con demasiada frecuencia una imagen simplificada cuando no sesgada y parcial de la realidad colombiana, ello sin menoscabo del importante papel jugado por los periodistas y muchos de los cuales han pagado con sus vidas el desempeño de su labor.*

*Nos guste o no, la realidad es tozuda y los hechos contundentes, de modo tal que este cuadro crónico de violencia política y estructural, explica en gran parte la imagen nacional e internacional del país: Colombia y Violencia parecen palabras sinónimas.*

*Tras más de 40 años de enfrentamiento armado, el conflicto social y la violencia política se intensifican y cunde la impresión de que el país se precipita inexorablemente hacia la guerra civil. No obstante sería desacertado desconocer los importantes pasos dados recientemente en el difícil camino hacia la construcción de la paz.*

*En 1998, durante el último año de la presidencia anterior, tuvo lugar una reunión propiciada por las Conferencias Episcopales Alemana y Colombiana en la ciudad alemana de Maguncia, a la que asistieron representantes de la denominada sociedad civil y del Ejército de Liberación Nacional (ELN), donde se estableció un acuerdo de humanización de la guerra y se abrió la posibilidad para el inicio de un proceso de diálogo.*

*El 7 de enero de 1999 en San Vicente del Caguán con el discurso del presidente de Colombia, Andrés Pastrana, y la lectura por un representante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la declaración de Manuel Marulanda Vélez, su máximo comandante, se inauguraban las conversaciones de paz entre el gobierno y el principal grupo guerrillero de Colombia. Desde mayo existe una agenda común entre el Gobierno y las FARC y se mantiene la voluntad de ambas partes de superar los obstáculos y sentarse a debatir tal y como ha sucedido este 24 de octubre.*

*Además, distintos sectores, a través de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, están reclamando la solución política negociada del conflicto, el respeto al Derecho Internacional Humanitario (DIH) y la participación directa de la sociedad en los diálogos y negociaciones de paz.*

*Ahora bien, el margen para el optimismo es limitado y no debemos llamarnos a engaño, las dificultades y los obstáculos para el avance de un auténtico proceso de negociación son numerosos.*

*La instalación de la mesa de negociación entre el gobierno y las FARC ha sufrido numerosos retrasos y las conversaciones encuentran múltiples amenazas. Los acercamientos logrados durante la anterior administración con el ELN, se han visto bloqueados por una peligrosa actitud gubernamental de menosprecio y por su negativa a facilitar un espacio de distensión en el interior del país. La reacción de la organización guerrillera tampoco ha facilitado las cosas. En cuanto al papel y al protagonismo que debe tener la rica y plural sociedad colombiana, aún no existe claridad ni acuerdo.*

*Su política económica y social excluyente con la aplicación de medidas de ajuste impuestas por el modelo neoliberal que afectan de forma negativa, directa e inmediata, a las condiciones de vida de amplios sectores de la población y ensanchan la profunda fractura social ya existente.*

*Y su tibia política frente al paramilitarismo, fenómeno extremadamente complejo nacido y alentado desde el seno del Estado, que mantiene estrechos vínculos con importantes sectores económicos y con el narcotráfico y que ha establecido sólidos apoyos regionales.*

*Sin una voluntad gubernamental clara y decidida para enfrentar esta lacra y sin resultados concretos, no será posible conducir el proceso de paz ni cimentar un auténtico estado de derecho. Es incomprensible que sigan campeando con total impunidad los responsables del 76% de las muertes por motivos socio-políticos, con más de 2.600 asesinatos anuales a sus espaldas, víctimas causadas entre la población civil. El ejército muestra una sospechosa ceguera cuando estos grupos actúan contra campesinos desarmados y acude abiertamente en apoyo de los paramilitares cuando éstos son atacados por la guerrilla. Existe una responsabilidad del Estado por acción u omisión y tarde o temprano tendrán que rendirse cuentas ante el pueblo colombiano y la comunidad internacional.*

Algunos pretenden que estos grupos delictivos y criminales, cuyas características son la ejecución de masacres, asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, la defensa de intereses vinculados al narcotráfico y de grandes propietarios de la tierra relacionados con el ilícito negocio sean considerados interlocutores políticos en un proceso de negociación. Entendemos que, por el contrario, el Estado debe utilizar todos los medios represivos legales a su alcance para lograr su desarticulación y combatirlos, al menos con la misma firmeza que lo hace frente a la guerrilla. En este sentido debe recordarse que el pleno respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de las múltiples recomendaciones internacionales sobre el tema es tarea sustancial y obligatoria del Estado. Asimismo, está obligado a respetar el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y, por mandato constitucional, hacer viable la paz ya que ésta es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Art. 22 C.N.).

Por su parte, las organizaciones guerrilleras, como oposición política armada, también tienen una responsabilidad histórica frente al pueblo colombiano, deben respetar el DIH y no escatimar esfuerzos en la construcción de la paz.

Lo único claro, por el momento, es que la administración Pastrana marca un punto de inflexión en el desarrollo del conflicto colombiano. La disyuntiva consiste en saber si estamos ante una administración que comienza a establecer los pilares firmes de una política estatal de paz o, por el contrario, una presidencia que conduce el país a una escalada militar sin precedentes y a su internacionalización. En este sentido, el intento estadounidense de intervenir en el conflicto bajo el paraguas ideológico de la supuesta lucha contra el narcotráfico, no sólo agrava el panorama sino que puede tener consecuencias imprevisibles para los destinos de Colombia y del conjunto de América Latina.

Estamos convencidos que en Colombia existen fuerzas y capacidades para superar la situación. Quizá haga falta más voluntad y determinación para crear las condiciones para la paz. De igual modo que la democracia no emana automáticamente de un texto constitucional, por muy completo y avanzado que éste sea, la paz tampoco se establecerá mecánicamente con la firma de un acuerdo sobre un papel. Pretender encontrar atajos en esta tarea, y suponer que la paz se logra exclusivamente acallando los fusiles, puede ser una salida en falso y fuente de futuras violencias.

Como señalan las ONG's de DD HH colombianas, "la paz será fruto del pleno respeto de los derechos humanos, la justicia, la verdad, la tolerancia y el cubrimiento de las necesidades básicas de la población, de la democracia con justicia social". En este sentido, consideramos esencial e impostergable hacer realidad los derechos fundamentales como único camino para construir la paz, entendiendo los Derechos humanos, la democracia, la justicia y la paz como procesos de construcción social y como realidades inseparables.

Este número de la revista América Latina Hoy aborda la compleja situación colombiana a partir de dos variables, conflicto social y violencia política, y reúne un conjunto de artículos ricos en análisis, reflexiones y propuestas. A los autores, todos ellos científicos sociales y expertos colombianos, les agradecemos sinceramente su colaboración.

El artículo de Alejo Vargas privilegia una perspectiva estructural en la que se destacan los problemas fundamentales del país. Víctor de Currea Lugo vincula el fenómeno de la violencia a problemas de orden histórico y a la débil configuración de la nacionalidad, en tanto que Alfredo Rangel analiza la guerrilla colombiana y la dinámica actual de su enfrentamiento con el Estado.

Un segundo tema, los vínculos existentes entre factores sociales, económicos y violencia, se tratan bajo tres dimensiones: desarrollo y equidad, reforma agraria e inversiones extranjeras. Jorge Iván González profundiza en la relación entre equidad, desarrollo y paz y lanza propuestas concretas encaminadas a lograr más desarrollo como camino para la construcción de la paz. Darío Fajardo plantea el problema agrario, la desigualdad en la distribución de la tierra y reflexiona sobre la siempre postergada reforma agraria. Y Héctor Mondragón analiza el impacto de las inversiones extranjeras y de los megaproyectos y su responsabilidad en la dinámica del conflicto.

En un tercer bloque de artículos se analizan el tema del Narcotráfico y la Seguridad Nacional. Juan Tokatlian privilegia la perspectiva internacional, aspecto cada vez más relevante y con demasiada frecuencia ignorado. Ricardo Vargas aborda el fenómeno desde una perspectiva nacional, con énfasis en actores tales como Fuerzas Armadas, paramilitares y guerrilla. Por su parte, Omer Calderón centra su estudio en cuestiones relativas a Seguridad Nacional desde una perspectiva diacrónica, estableciendo la relación entre Fuerzas Armadas-poder civil y los distintos mecanismos del Estado para el mantenimiento del orden público.

Y por último, Antonio Suárez nos introduce en un cuarto tema, la relación entre justicia y paz y de ambas con el proceso de paz.

Por supuesto estas páginas no agotan todos los temas ni mucho menos las perspectivas posibles, ahora bien consideramos que tanto los aspectos destacados como la forma en que se tratan, además de pertinentes, son fundamentales para comprender el conflicto colombiano y reflexionar sobre las perspectivas de una solución justa, democrática y civilista. La suma de estas aportaciones nos ofrece una visión de conjunto muy sugerente y original sobre la situación colombiana y pretende ser una herramienta para conocer la naturaleza del conflicto e indagar sobre las perspectivas de su solución.

Tres de los artículos aquí presentados fueron recopilados a modo de ponencias para el Encuentro Internacional por la Paz en Pamplona (España) a celebrarse en abril de 1998 organizado por el Gobierno de Navarra y las ONG's Mugarik Gabe, IPES y SODEPAZ, el cual finalmente fue suspendido.

Aprovechamos para agradecer la colaboración de SODEPAZ y, especialmente, a Carmen Santiago y Pablo Lorente. Igualmente queremos expresar nuestra gratitud a Hernando Perdomo, Pedro Medellín, Migüi y Edurne Almirantearena.

No quisiéramos concluir esta presentación sin mencionar el drama que vive la universidad pública colombiana, reflejo de la crisis generalizada que sufre el país. Situación crítica en materia presupuestaria, pero aún más grave si cabe por el cuestionamiento que los actos de violencia producen en la esencia de la universidad como espacio de reflexión, diálogo, debate y tolerancia.

Desde América Latina Hoy recordamos al profesor universitario José Antonio Bejarano cuyo asesinato, ocurrido en septiembre de este año, nos ha consternado. Hace apenas un año estuvo con nosotros en Madrid en el marco del Seminario Internacional sobre Problemas Colombianos organizado por el CSIC y la Universidad de Antioquia. Por "Chucho" sentimos una gran admiración intelectual y humana por su extraordinaria lucidez y la franqueza con que expresaba sus puntos de vista. Nuestra más enérgica condena de este crimen y el de otros profesores universitarios y personalidades como Hernán Henao, Darío Betancur, Jaime Garzón, Gustavo Marulanda, al igual que el de tantos y tantos estudiantes. Desde estas páginas pedimos el esclarecimiento de estos execrables hechos y juicio y castigo a sus responsables.